

Santiago, quince de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos décimo a décimo quinto, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

PRIMERO: Que en cuanto a la reparación integral del daño, excepción opuesta por el demandado, es necesario señalar que tal como lo sostuvo la jurisprudencia, la Comisión Valech no pretendió, en estricto rigor, efectuar una “transacción” con cada uno de los beneficiados para así precaver la interposición de una acción como la del caso de autos; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser el actor beneficiario de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de “prisioneros políticos torturados”, tal hecho no es óbice para que los afectados interpusieran la acción indemnizatoria del caso de autos.

Por lo demás, la situación que lo afectó está dentro de lo que la teoría del derecho de daños estima procedente, en orden a reparar el daño causado y nada más que el daño, centrando la función primordial de la reparación en la víctima. Así, si el Estado es culpable por los atentados a la dignidad humana, la responsabilidad civil se concretiza en la teoría de daños, cuya función esencial es su reparación, efecto que a su vez se radica en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQBY

patrimonio del Estado quien tiene el deber de repararlo, entre otras formas, por indemnizaciones pecuniarias.

En tal sentido, está acreditado que el demandante Jorge Navarrete Maldonado, tenía 23 años cuando fue detenido y llevado a la Escuela Naval y luego llevado a Pisagua, por cerca de 40 días, y durante su privación de libertad fue constantemente interrogado, torturado física y psicológicamente.

Así las cosas, los perjuicios que reclama el actor se enmarcan en el daño moral y la indemnización por ese concepto es una manera de abordar la reparación, pues no se pueden borrar los hechos experimentados que consistieron en las violaciones a los derechos humanos del demandante, configurándose así la obligación de otorgar una indemnización pecuniaria que compense el daño causado y que no ha sido íntegramente reparado, por lo que la excepción de pago y/o reparación integral opuesta por el Fisco no podrá prosperar.

SEGUNDO: Que sin embargo, no se pueden obviar las prestaciones pecuniarias otorgadas por el Estado en este tipo de materias al demandante don Jorge Navarrete Maldonado, que conforme al oficio emitido por el IPS corresponde a la suma total \$42.405.914, teniendo en consideración la naturaleza de ellas.

En efecto, el hecho dañoso que motivó la dictación de las leyes de reparación, a saber, Ley N° 19.992 y Ley N° 20. 874, entre otras, fue el hecho ilícito del actuar de los agentes del Estado hacia víctimas que sufrieron persecución política, según quedó así recogido en el Informe Valech. Enseguida, debe tenerse en consideración que el hecho ilícito es la causa adecuada del beneficio y del daño, es



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQBY

decir que tanto el beneficio como el daño provienen del mismo hecho ilícito.

En este aspecto, las leyes de reparación fueron una reacción positiva del Estado, pero que no inhiben a las personas que se sienten perjudicadas a solicitar la reparación integral de su daño por la vía judicial. Sin embargo, tanto las leyes de reparación como las indemnizaciones otorgadas por los tribunales cumplen una función reparadora de daños, que emana de la misma naturaleza, cual es el daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias.

La regla de la compensatio lucri cum damno es un principio de imputación de los perjuicios, dentro de la teoría del derecho de daños y la reparación integral, por lo que emanando el mismo menoscabo del actuar ilícito de los agentes del Estado, teniendo, además, la misma naturaleza cual es la reparación del daño moral, por ser el actor víctima del actuar ilícito de agentes del Estado, procede la Responsabilidad de éste. En tal sentido, el monto ya referido y otorgado a través de las Leyes de reparación se tiene presente al determinar la suma final a recibir por parte de las víctimas, tal como en el mismo sentido lo resolvió la Sentencia ingreso Corte N° 1763-2020, de esta Corte de Apelaciones.

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Se revoca la sentencia apelada de fecha 14 de julio de 2023, en cuanto acoge la excepción del demandado Fisco de Chile de reparación integral del daño demandado, y en su lugar se la rechaza.

II. Se confirma esta sentencia en lo demás apelado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQPB

Acordada con el voto en contra del ministro señor Zepeda, quien estuvo por revocar la sentencia apelada en cuanto resuelve que la indemnización de perjuicios por daño moral que debe recibir el demandante señor Jorge Omar Navarrete Maldonado del demandado Fisco de Chile, debe ser calculada restando de ella la suma de \$ 42.405.914, entregada a la víctima a agosto de 2021, a título de pensión asistencial conforme a reconocimientos legales de la Ley 19.123, Ley 19.992 y otras leyes posteriores. Pues, a juicio del disidente, ello configura un error de derecho en la determinación de la indemnización a título de daño moral sufrido por la víctima.

Y con su prevención en cuanto a que confirma la sentencia apelada con declaración que se acoge la demanda y se eleva, el monto de la indemnización por daño moral que el demandado Fisco de Chile debe pagar en favor del demandante señor Jorge Omar Navarrete Maldonado, a la suma de \$ 77.406.000, más reajustes e intereses desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Lo anterior en virtud de los siguientes fundamentos:

1º Que, la reiterada y uniforme jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, conociendo innumerables recursos casación en el fondo del Fisco de Chile en esta materia, ha asentado que no se puede aceptar la alegación del demandado Fisco de Chile de declarar improcedente la indemnización por daño moral que se ha demandado de conformidad a la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de personas que señala, sus sucesivas ampliaciones, determinaciones y modificaciones por parte del Estado de Chile, y por la Ley 19.992,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQBY

conocida como Ley Valech, que otorga una pensión asistencial y de reconocimiento del Estado de Chile a las víctimas afectadas por violaciones a los derechos humanos, consideradas por éste en el anexo denominado “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados”, la que en el artículo 4º dispone que esta pensión es compatible con cualquiera otra, que corresponda al beneficiario, salvo aquellas otorgadas por exoneración política en las leyes 19.234, 19.582 y 19.881, asimismo con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido por las leyes, y la Ley 20.874, que otorga un aporte de reparación parcial a las víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

2º Que, en efecto, la equivocada pretensión del demandado Fisco de Chile, al interponer la citada excepción contradice seriamente lo dispuesto en la normativa internacional y que se ha concretado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la Excma. Corte Suprema en sus fallos ha reconocido invariablemente, las que consagran el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida y total reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos a la que queda sujeta la responsabilidad del Estado de Chile por esta clase de ilícitos.

Por consiguiente, la normativa interna invocada por el demandado Fisco de Chile, que solamente establece un sistema de pensión asistencial y otros bonos y derechos, entre otros de educación y salud para la víctima y su familia, no contempla efecto o consecuencia alguna en relación con la indemnización por daño moral que se persigue por esta vía jurisdiccional, siendo ambas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQPB

compatibles, pues es claro que la acción judicial de la pretensión de indemnización en favor de la víctima, señor Jorge Omar Navarrete Maldonado, tiene como fin exclusivo fijar individual y singularmente el rubro daño moral de la responsabilidad extracontractual del Estado de Chile, daño moral que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se refiere exclusivamente al dolor físico, psicológico, emocional o moral experimentado por una persona como resultado de una violación de sus derechos fundamentales reconocidos por el Derecho Internacional, y que puede incluir angustia, humillación, ansiedad, trauma emocional y otras formas de sufrimiento, lo que es totalmente distinto y no guarda relación alguna con la pensión reconocida por el Estado en favor de la víctima y demás derechos de seguridad social que legalmente le fueron concedidos, sin que pueda suponerse que estos reconocimientos por parte del Estado fueron entregados como un cálculo general y anticipado para reparar todo el daño inferido mediante atentados a los derechos humanos que sufrió parte de la población civil en Chile, entre ellos el daño moral, ya que se trata de formas distintas de reconocimiento conforme a las reglas del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos. Debiendo enfatizarse que los beneficios que asume legal y voluntariamente el Estado en esta materia, como es el caso de la legislación interna antes señalada, no importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de la acción y de la pretensión de indemnizar todo el daño moral sufrido por la víctima por los medios que autoriza la ley, estableciendo los hechos que la configuran.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQBY

3º Que, aún más, el artículo 4º de la Ley N° 19.123, refiriéndose, en parte, a la naturaleza y objetivos de la misma, expresa: “En caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber a personas individuales. Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámite, en conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

Lo mismo dispone la Ley 19.992, conocida como Ley Valech, al disponer el artículo 4º, que esta pensión es compatible con cualquier otra que corresponda al beneficiario.

4º Que, es pacífica la jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema, en cuanto resulta relevante reconocer la compatibilidad de la acción indemnizatoria que pretende la indemnización por compensación del daño moral sufrido por la víctima, con los beneficios económicos otorgados a través de la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y establece pensiones asistenciales y otorga otros beneficios, la Ley 19.992 y las demás leyes antes mencionadas.

Pues, según se ha enfatizado, los beneficios legales recibidos por la víctima y sus familiares son una forma de reconocimiento colectivo que se diferencia de la reparación material del daño moral individual sufrido por la víctima, adoptando de esa forma nuestro más Alto Tribunal lo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que el proceso de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQPB

reconocimiento abarca todo daño, debiendo responder el Estado a las diversas necesidades de las víctimas tanto individuales como colectivas, materiales e inmateriales como forma de reintegración igualitaria y efectiva en la sociedad - lo que por lo demás, es congruente con lo que dispone el artículo 2314 del Código Civil, que consagra el principio rector de que el responsable debe reparar todo el daño provocado -.

5º Que, esta jurisprudencia es además importante porque se adscribe a reflexiones congruentes con las normas y principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos reconocidos universalmente por todos los estados civilizados, que si se dejan de aplicar a casos a que están llamados a regir, se produce su infracción por el Estado de Chile, y compromete su responsabilidad internacional, acorde con lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República, ubicado en el Capítulo I, sobre Bases de la Institucionalidad, que junto con reconocer el carácter vinculante de los Instrumentos de Derecho Internacional, establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Disposición que pone a tales derechos sobre la soberanía y el deber del Estado de respetar y promover no solo aquellos establecidos en la Constitución, sino todos los que forman parte del acervo cultural de la humanidad. Entre los que también ha de entenderse la indemnización total, uno de cuyos aspectos es la del daño moral reclamado jurisdiccionalmente en estos autos.

6º Que, de este modo, el artículo 5º - como se ha dicho Base de la Institucionalidad - pasa a ser una norma



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQBY

aplicable directamente en la resolución del caso concreto, en cuanto amplía la base normativa de Derecho y además, al establecer un límite infranqueable al intérprete.

7º Que, por estas consideraciones, el disidente fue de parecer de revocar parcialmente la sentencia apelada, y de prevenir en cuanto a confirmarla únicamente en que se concede la indemnización por concepto de daño moral al demandante, señor Jorge Omar Navarrete, con declaración que a la indemnización en cuanto compensatoria del daño moral, no se le resta la cantidad de \$ 42.405.914, por no tener tal disminución sustento constitucional ni legal, acogiendo la demanda con declaración de elevar el monto de la indemnización por concepto de daño moral a la cantidad de \$ 77.406.000, más reajustes e intereses desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra (S) señora Isabel Zúñiga Alvayay y del voto en contra y la prevención, su autor.

Rol Corte Civil N° 12.959-2023. (Acum. 12960-2023)

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por la ministro (S) señora Isabel Zúñiga Alvayay y el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQPB Y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQPB Y

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Jorge Luis Zepeda A., Ministra Suplente Isabel Margarita Zuñiga A. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, quince de abril de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXLJXMXQPB Y